

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

Santiago de Cali, catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No.

**RADICACIÓN No. : 76-001-23-33-008-2015-00122-01**  
**ACCIÓN : REPARACIÓN DIRECTA**  
**DEMANDANTE : JUAN CAMILO GIRALDO OSORIO**  
**DEMANDADO : SAE S.A.S.**

**MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT.**

Dando cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado en auto del 18 de junio de 2020, por medio del cual se ordenó resolver nuevamente la solicitud de prelación de fallo presentada por la señora ALICIA OSORIO GONZÁLEZ, en atención a los argumentos expuestos en dicha providencia, este Despacho considera:

La señora ALICIA OSORIO GONZÁLEZ presentó solicitud de prelación de fallo, justificando tal pedimento en que pertenece al grupo poblacional de adulto mayor por tener 75 años de edad, y además, padece una patología oncológica (fls. 710 a 713 del Cdno. 2). Como respaldo de este pedimento, aportó documentos que hacen parte de su historia clínica (fls. 720 a 729 ídem), y un escrito del 19 de junio de 2019 firmado por su médico tratante, en el cual se indica que la señora OSORIO GONZÁLEZ padece un carcinoma neuroendocrino del páncreas, y se encontraba en tratamiento activo con quimioterapia de duración indefinida (fl. 719 íbidem).

En este sentido, se encuentra que si bien la actora cedió sus derechos litigiosos al señor JUAN CAMILO GIRALDO OSORIO, y a la misma le fue conferido poder para actuar en su representación; tal situación no indica que la misma ha dejado de ser parte dentro de este asunto –como se consideró anteriormente–, y por ello, debe analizarse de fondo su petición.

Así pues, tal y como se señaló en el auto del 18 de junio de 2020, la Corte Constitucional ha determinado ciertos casos en donde resulta procedente la prelación de fallo, y al respecto ha establecido:

"(...)

*En primer lugar, la alteración del orden regular para el fallo se justifica si el juez está en presencia de un sujeto de especial protección constitucional. La Corte precisa que el derecho a la igualdad que subyace al sistema de turnos sólo puede ser alterado en consideración a la calidad de sujeto de especial protección que la Constitución reconozca a un individuo. Al respecto, la sentencia en cita afirma que "todo aquel que demanda justicia del Estado alienta la pretensión de un fallo oportuno, y son muy diversas las circunstancias que las personas podrían esgrimir para obtener una alteración en su favor del turno para fallar. Por consiguiente, el primer presupuesto para que ello sea posible tiene una definición estricta, porque la afectación del derecho a la igualdad de aquellos que se vean desplazados en el orden de los fallos sólo puede encontrar sustento en la situación evidente de debilidad, en niveles límite, que presente aquel en cuyo beneficio se de tal alteración".*

*En segundo término, para que pueda modificarse el turno de fallo se requiere que la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado. La jurisprudencia dice que "es necesario que el atraso exceda los límites de lo constitucionalmente tolerable. Ello, a su vez, implica que, pese a que todo atraso es contrario al derecho de acceso a la administración de justicia, para que proceda la excepción, debe estarse en presencia de un atraso de carácter extraordinario en relación con la situación que, en general, presente la administración de justicia, y, además, que no se hayan adoptado medidas legislativas o administrativas para superarlo, o que las que se hayan tomado no se muestren efectivas a la luz del caso concreto. De no ser ello así, esto es si la mora no reviste características extraordinarias o si las medidas para enfrentarla se han mostrado eficaces, la situación se inscribe dentro de la carga que el atraso judicial comporta y que todas las personas deben soportar en condiciones de igualdad".*

*Finalmente, debe existir una relación directa entre las condiciones particulares del afectado y la resolución que espera de la administración de justicia. En otras palabras, la preservación del derecho fundamental que reclama el demandante debe estar en íntima relación de dependencia con la decisión que está llamado a adoptar el funcionario judicial. Al decir de la Corte, se requiere que "la controversia tenga relación directa con las condiciones de las que se deriva la calidad de sujeto de especial protección y que, de resultar favorable el fallo, la decisión sea susceptible de incidir favorablemente en tales condiciones".*

*(...)"<sup>1</sup>.*

De manera que, al revisar el expediente y los documentos que soportaron la solicitud de prelación de fallo, este Despacho encuentra que, a pesar de no evidenciarse una mora injustificada<sup>2</sup>, la señora ALICIA OSORIO GONZÁLEZ sí se encuentra en condiciones para considerarla un sujeto de especial protección constitucional en razón a su edad y a su estado de salud, pues además de padecer la patología mencionada en líneas atrás; también le han sido hallados

<sup>1</sup> CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA, Sentencia T-945A de 2008.

<sup>2</sup> CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Sentencia T-186 de 2017: "En síntesis, la mora judicial injustificada objeto de reproche constitucional parte del supuesto de que no todo incumplimiento de los términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues para que ello ocurra se requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.

*La mora judicial injustificada, además, se ha construido alrededor de la valoración sobre el cumplimiento de los deberes a cargo del funcionario judicial, exigiendo para su configuración una actuación negligente o actitud omisiva de éste frente a sus obligaciones, por lo tanto, en los casos de procedencia del amparo se dispone, usual y paralelamente a la protección constitucional, la remisión de las actuaciones a las autoridades administrativas y disciplinarias pertinentes, para lo de su competencia."*

otros padecimientos que afectan su salud, de conformidad a lo señalado en su historia clínica general.

En este orden de ideas, y en atención a las particularidades de la situación de la solicitante, este Despacho ordenará la modificación de los turnos establecidos para los procesos que están a la espera de fallo, y concederá la prelación de este asunto para proferir su sentencia.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala Unitaria de Decisión, **RESUELVE**:

**PRIMERO. – OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE** lo resuelto en el auto del 18 de junio de 2020 proferido por la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado.

**SEGUNDO.- CONCEDER** la prelación de fallo solicitada por la señora ALICIA OSORIO GONZÁLEZ, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

***NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE***

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a horizontal line and a long, sweeping curve to the right.

**OSCAR A. VALERO NISIMBLAT**  
**Magistrado**